

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO No:	11001 33 35 029 2022 00169 00
CLASE DE ACCIÓN:	EJECUTIVO
ACCIONANTE:	JESÚS ANTONIO PINEDA BOCANEGRA
ACCIONADO:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

Procede el Despacho a estudiar la demanda ejecutiva presentada, por conducto de apoderado, por el señor JESÚS ANTONIO PINEDA BOCANEGRA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – (en adelante – Colpensiones), de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Respecto a los títulos ejecutivos se ha señalado jurisprudencialmente por el H. Consejo de Estado que los mismos deben de cumplir con unas condiciones sustanciales a saber la claridad, exigibilidad y expresividad; y unos requisitos formales que debe de contener el documento que se pretende ejecutar, estos requisitos son: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva¹

De la misma manera, de conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra

¹ Sentencia del 18 de marzo de 2010- Exp. 22.339

providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley...”

De otro lado, la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado² ha señalado que el título ejecutivo debe contener unas condiciones formales y otras de fondo, donde los primeros *“buscan que los documentos que integran el título conformen unidad jurídica, que sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.”*, y los segundos, *“buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.”*

En suma, es pertinente aclarar que, los documentos que integren el título ejecutivo deben constituir ineludiblemente plena prueba contra el deudor, aspecto que se hace parte de los requisitos formales exigidos, toda vez que esto es la certeza de la existencia de la obligación.

Frente a las cualidades del título ejecutivo la misma Corporación³ a dicho *“...que la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; es decir, que el documento que contiene esa obligación deben constar en forma nítida, en primer término, el crédito del ejecutante y, en segundo término, la deuda del ejecutado; tienen que estar expresamente declaradas estas dos situaciones, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. La doctrina enseña que “Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta”*

² Sección Segunda – Subsección “A” M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Exp. 25000-23-25-000-2007-00435-01 (2596), auto del veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010).

³ Sección tercera. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Exp. 2001-23-31-000-1999-0090-01 (16669). Providencia del doce (12) de julio de dos mil (2000).

La obligación es clara cuando además de ser expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o de una condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se debe, a la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento.”

CASO CONCRETO

El señor Jesús Antonio Pineda Bocanegra, pretende la ejecución de la sentencia proferida por este Despacho el día 12 de noviembre de 2020 y, en el que solicita se libre mandamiento ejecutivo en su favor y en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en el sentido que se ordene a la citada entidad ejecutada - Colpensiones a reconocer la pensión de Vejez del ejecutante en cuantía de \$17.214.827,30 – calculadas al año 2021.

Lo anterior, con fundamento en que, Colpensiones no ha dado cumplimiento a la orden judicial respecto al restablecimiento del derecho, comoquiera que desde la orden implicaba el reconocimiento y liquidación de la pensión conforme la aplicación del Decreto 1835 de 1994 – en la que se determinó **“ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a reconocer la pensión de vejez al señor JESÚS ANTONIO PINEDA BOCANEGRA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.407.346, bajo el régimen de alto riesgo conforme los artículos 5 y 13 del Decreto 1835 de 1995...”**

Precisa que, Colpensiones al momento de cumplir el fallo de instancia, no lo hizo de acuerdo a lo aplicable en la vigencia del Decreto 1835 de 1994, sino que decidió aplicar dicho cumplimiento el texto vigente y actual de la Ley 797 de 2003, la cual reformó desde enero de 2003 – la fórmula del cálculo del porcentaje o tasa de reemplazo y que, la citada entidad en la Resolución SUB 204531 del 27 de agosto de 2021, calculó el IBL conforme a lo señalado en el Decreto 1835 de 1994 – de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y que no tiene ningún reparo en

dicha decisión, dado que en efecto el IBL asciende al año 2021 a la suma de \$20.252.738 – valor aplicable a las reglas de la reforma legal del año 2003 y, aplicando una tasa de reemplazo del 67% - implicando que la pensión al año 2021 de \$13.569.334.

Considera que el ejecutante debe acceder a la pensión bajo las reglas entre el 03 de agosto de 1994 y el 26 de julio de 2003, época en la que la tasa de reemplazo era la contenida en la Ley 100 de 1993, la cual señalaba que los pensionados accederían a una tasa de reemplazo inicial de 65% y tendría derecho a incrementar dicho % en 2% por cada 50 semanas adicionales hasta el 73% hasta las 1200 y luego, incrementar el 3% por cada 50 semanas hasta 1400 – pudiendo llegar hasta un máximo del 85%, porcentaje favorable y que, por ende, su pensión al año 2021 sería de \$17.214.827,30 (\$20.252.738 x 85%), razón por la cual, solicita que se libre mandamiento de pago ordenando a Colpensiones reconocer como mesada pensional al demandante para el año 2021 en dicha suma de dinero.

De acuerdo con lo anterior, se observa que, la parte ejecutante en el presente proceso pretende a través de la acción ejecutiva se libre mandamiento de pago en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – conforme al fallo proferido por este Despacho el 12 de noviembre de 2020, en el sentido de ordenar a la citada entidad ejecutada - a reconocer la mesada pensional (pensión del Vejez) del señor Jesús Antonio Pineda Bocanegra – en cuantía de \$17.214.827,3 y, por consiguiente, considera que, no se ha dado cumplimiento en su totalidad a la sentencia judicial, comoquiera que la entidad ejecutada aplicó una tasa de reemplazo del 67% lo que implica una pensión al año 2021 de \$13.569.334 y, discurre que debió aplicar el máximo porcentaje del 85% - porcentaje favorable al año 2021 de \$17.214.827,30.

No obstante, esta Sede Judicial precisa que, revisada la sentencia judicial⁴ (2019-010) se ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – reconocer la pensión de Vejez al señor Jesús Antonio Pineda Bocanegra – bajo el régimen de alto riesgo conforme a los artículos 5 y 13 del Decreto 1835 de 1995 al cumplir con los requisitos de transición establecidos en el inciso primero del artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, al haber adquirido el status el 05 de abril de 2015 con efectos fiscales a partir del 20 de abril de 2015 y, precisando que la citada prestación

⁴ Página 7 al 24 del Archivo 01 del Exp. digital.

quedará en suspenso hasta tanto se acredite el retiro del servicio el demandante (Jesús Antonio Pineda Bocanegra).

De otra parte, se tiene que Colpensiones a través de la Resolución SUB 204531 del 27 de agosto de 2021⁵, procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 2019-010 de fecha 20 de noviembre proferida por este Despacho, en el sentido de reconocer la pensión de Vejez de alto riesgo al señor Jesús Antonio Pineda Bocanegra conforme a lo dispuesto en el artículo 5° y 13 del Decreto 1835 de 1994, donde este último artículo indica que la base de cotización e ingreso base de liquidación, la base para calcular las cotizaciones de los funcionarios y el ingreso base de liquidación serán los establecidos en los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.

Asimismo, precisa que el tope o monto máximo de la base de aportes a seguridad social corresponde a 25 salarios mínimos mensuales conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 – modificado por la Ley 797 de 2003, procediendo a realizar la liquidación de la prestación reconocida de la siguiente manera: $IBL\ 2021.\ 20.252.738 * 67 = \$13.569.334$, es decir, valor de la mesada a 01 de septiembre de 2021 de \$13.569.334, es decir, conforme a lo regulado en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 y lo regulado a partir del 01 de enero de 2004.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que no hay congruencia entre lo solicitado por la parte ejecutante en la demanda ejecutiva y lo ordenado en la sentencia, comoquiera que por un lado, en la sentencia judicial que constituye como título ejecutivo, se ordenó reconocer la pensión de vejez de alto riesgo conforme a lo establecido en el artículo 5 (requisitos para obtener la pensión de Vejez) y el artículo 13° del Decreto 1835 de 1995, haciendo alusión este último a la base de cotización e ingreso base de liquidación – lo establecido en los artículos 18 modificado por la Ley 797 de 2003 – al haber adquirido el status el 05 de abril de 2015 -con efectos fiscales a partir del 20 de abril de 2015 y, en ningún momento, se precisó y ordenó reconocer la aludida pensión de Vejez con una tasa de reemplazo al máximo del 85% - conforme a lo solicitado en la demanda ejecutiva .

Se segundo lugar, se observa que la entidad ejecutada – Colpensiones- no se evidencia que le adeude valor alguno al ejecutante, teniendo en cuenta que el

⁵ Página 31 al 46 del Archivo 01 del Exp. digital.

ejecutante no se ha retirado del servicio activo y que dicha prestación quedó en suspenso de ingresar en nómina de pensionados hasta tanto (se reitera) no acredite el retiro del servicio de acuerdo a lo ordenado en la citada sentencia (2019-010), luego, resulta claro que no constituye título ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 297 del C.P.A.C.A.

En virtud de lo expuesto, no se puede librar mandamiento de pago por una obligación por cuanto no se adeuda suma alguna al ejecutante por parte de la entidad ejecutada – por cuanto la misma está supeditada y quedará en suspenso de ingresar a nómina de pensionados hasta la acreditación del retiro del servicio del ejecutante y que lo solicitado en la demanda ejecutiva no fue lo ordenado en la sentencia.

Conforme con lo anterior, se debe tener en cuenta que, si bien la pretensión está soportada la sentencia judicial dictada por este Despacho (12 de noviembre de 2020), se considera que la pretensión aquí incoada no está soportada en sí misma, por ende, no constituye un título ejecutivo, debido a que no se evidencia que Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones adeude suma alguna y que en la sentencia judicial no ordena en los términos argumentativos del ejecutante de reconocer la pensión de Vejez en una tasa de reemplazo al máximo del 85%; en esa medida, resulta claro que, la acción ejecutiva no es el medio de control idóneo para el reconocimiento de lo aquí pretendido por la parte ejecutante – hasta tanto, se evidencie que la entidad ejecutada esté obligada al pago de sumas de dinero que sea exigible de acuerdo a lo señalado en el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011.

En conclusión, conforme los argumentos esbozados, no se librá el mandamiento de pago solicitado.

Por lo anterior, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá;

R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el mandamiento de pago dentro del proceso No. 110013335029**20220016900** incoado por JESÚS ANTONIO PINEDA BOCANEGRA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y déjense las constancias correspondientes.

TERCERO: Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.0096.530 y portador de la tarjeta profesional No. 131.246 del CSJ, para actuar en los términos y para los efectos del poder conferido en el presente proceso, como apoderado de la parte ejecutante.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 21 de julio de 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
APODERADO	cristianfelip@hotmail.com
DEMANDANTE:	
DEMANDADO:	notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
M. PÚBLICO:	
PROCURADOR 191	
JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Procjudadm191@procuraduria.gov.co